

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, en este procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, seguido ante el Juzgado de Letras de Cañete, bajo el Rol C-118-2021, caratulado “Mulvey con Frontel S.A.”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por la demandada, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó el fallo de primer grado que acogió la demanda y la condenó al pago de \$75.000.000.- por concepto de daño emergente y \$15.000.000.- a título de daño moral.

Segundo: Que, la empresa recurrente sostiene que el fallo impugnado ha acogido la demanda con infracción a lo dispuesto en los artículos 1698 y 1700 del Código Civil, 341, 342, 346, 409, 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil al aceptar como prueba de la demandante documentos que se referían a materias propias de un informe pericial y que no fueron reconocidos en juicio, y por otra parte, no se hizo cargo de la documental y testimonial que aportó su parte, dejándole de otorgar el valor que le reconoce la ley.

En segundo lugar, se reclama que se ha hecho una incorrecta aplicación del artículo 57 de la Ley General de Servicios Eléctricos al imputar responsabilidad civil a su parte respecto del incendio que afectó al inmueble del actor, a pesar que este se originó por la caída de un árbol sobre el cual su dueño debió velar para que no perturbara la línea eléctrica, como finalmente ocurrió a pesar que su parte si cumplió con el deber que le imponía la ley de mantener adecuadamente la línea eléctrica y la franja de seguridad despejada.

Siguiendo con su exposición, el recurrente explica que en el inmueble siniestrado existían árboles cuyas ramas se encontrarían cercanas a las líneas de media tensión, circunstancia que da cuenta de un hecho de la propia víctima que constituye un incumplimiento grave de lo ordenado en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, lo que unido a la prueba documental y testimonial que rindió evidencian que la demandante incumplió tanto sus obligaciones derivadas de la normativa eléctrica como también las instrucciones establecidas por CONAF para el resguardo de propiedades con material combustible en sus cercanías, lo que además de constituir una infracción legal o reglamentaria, configura un hecho culposo al no emplear la diligencia necesaria que permitiera evitar o aminorar el daño y al no calificarlo de ese modo se han vulnerado los artículos 1698, 2315, 2330 del Código Civil, y 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Tercero: Que, al contrastar lo decidido con el tenor del recurso, queda de manifiesto que las alegaciones del impugnante persiguen desvirtuar los supuestos fácticos fundamentales fijados por los sentenciadores, esto es, en primer lugar que



el incendio que causó los daños materiales al actor se originó en la caída de un pino sobre un cable eléctrico que se encontraba sin protección, lo que provocó que se generara un arco eléctrico que, atendidas las favorables condiciones ambientales, produjo la ignición y consecuente combustión de las malezas y especies arbóreas que se encontraban bajo el cable referido y dentro de la faja de seguridad; y que en el lugar preciso del origen del incendio habían pastizales y material arbóreo o vegetal seco, y que los cables eléctricos de distribución estaban mayormente rodeados de grandes árboles -pinos- de varios metros de altura incluso de la altura de los postes o más , sobrepasando la altura del cableado eléctrico. Tales hechos llevaron al tribunal a concluir que la demandada no dio cumplimiento a sus obligaciones legales y reglamentarias siendo negligente en las labores de mantención de las instalaciones eléctricas, descartando de esa forma la defensa de la empresa eléctrica sobre la responsabilidad, que le cabría al dueño del terreno donde se ubicaba el pino.

Finalmente, el tribunal estableció que no concurría la culpa de la víctima ni la exposición imprudente al daño, pues las circunstancias fácticas que invocó la demandada no constituían dichas eximentes sin que se le haya imputado al demandante una conducta determinada.

Cuarto: Que en este sentido resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y, efectuada correctamente dicha labor en atención al mérito de las probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba que han permitido establecer los presupuestos fácticos que vienen asentados en el fallo, lo que no acontece en el caso de autos.

En efecto, no se observa de los antecedentes que se haya infringido el artículo 1698 del Código Civil, regla que se vulnera cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el onus probandi, lo que no ha ocurrido. En tanto, en relación a la prueba documental no se ha negado el valor de instrumento público a aquellos que revestían dicha condición de manera que no se observa una transgresión a los artículos 1700 en relación con los artículos 342 y 346 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil sólo indica pautas a los jueces para apreciar la prueba testimonial dentro de sus facultades privativas, mientras que el artículo 341 del mismo código también evocado por el recurrente, tiene el carácter de *ordenatoria litis* de modo que su infracción en caso de existir realmente, no puede servir de base para la interposición de un recurso de casación en el fondo debiendo anotarse además que no tiene el carácter de norma



reguladora de la prueba pues solo se limita a enunciar los medios que la ley procesal reconoce. Finalmente, tampoco resulta atendible el reclamo sustentado en una eventual infracción al artículo 409 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto tal disposición carece de las características de las que se viene hablando al regular un aspecto puramente formal relacionado con la procedencia de la prueba de peritos.

Quinto: Que lo razonado lleva a concluir que el recurso de casación en el fondo no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 772 y 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Juan Antonio Baeza Navarrete, en representación de la demandada, en contra de la sentencia de siete de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 56.441-2024

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G. y los Abogados integrantes señor Álvaro Vidal O. y señor Raúl Patricio Fuentes M. No obstante, haber concurrido a la cuenta de admisibilidad y al acuerdo, no firman los Abogados integrantes señores Vidal y Fuentes, por ausencia.



En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

